



Canelo, Paula (2016), *La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983)*, Buenos Aires, Edhasa, 262 pp.

Juan Luis Besoky*

El nuevo libro de Paula Canelo, publicado a 40 años del último golpe de Estado, sale a la luz acompañando y analizando las recientes apariciones de nuevos documentos de la Junta Militar. Se trata, y aquí radica lo novedoso de su trabajo, de documentos de naturaleza secreta, reservada o restringida, divididos en dos corpus fundamentales. Por un lado, los llamados Planes Políticos de la dictadura, que fueron redactados por la Junta Militar, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (SGP), el Ministerio de Planeamiento y demás instituciones de las Fuerzas Armadas. También incluye otros planes que fueron elaborados de manera personal por altos funcionarios gubernamentales o civiles, que colaboraron con el régimen en tanto ideólogos del Proceso, como Américo Ghioldi, embajador en Portugal, y Jaime Perriaux creador del grupo Azcuénaga, una de las usinas de la dictadura. Estos documentos ya venían siendo analizados por la autora y por otros investigadores, que los recibieron por haber ido pasando de mano en mano entre funcionarios de la dictadura e investigadores y periodistas. Por otro lado, la autora analiza también las llamadas Actas Secretas de la Dictadura, las cuales fueron descubiertas en 2013 en el edificio Cóndor y constituyen el fondo documental más importante que haya sido hallado sobre la Junta Militar en las últimas décadas. Se trata de 280 actas que detallan los temarios de cada una de las reuniones formales

* Prof. en Historia, Doctor en Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET. Contacto: juanelebe@gmail.com

realizadas por la Junta Militar.¹ A esta copiosa documentación la autora agrega otras fuentes variadas y complementarias como entrevistas a los protagonistas, documentos oficiales, leyes y prensa partidaria y del período.

En su libro Canelo avanza más allá del *mainstream* de sentidos predominantes sobre la dictadura donde abundan las lecturas economicistas que ven como objetivo excluyente del Proceso de Reorganización Nacional la imposición de un modelo económico; o las que priorizan el accionar de los civiles por sobre los militares, por lo cual sería más importante estudiar a los civiles que acompañaron la dictadura. En su trabajo busca recuperar la dimensión autónoma de la política del Proceso, atendiendo a la centralidad que adquirió el actor militar con sus heterogéneas fracciones internas, intereses y propiedades institucionales. En palabras de la autora “las Fuerzas Armadas no actuaron subordinadas a los civiles sino que fueron el actor predominante”. En este sentido el libro de Canelo busca hablar sobre los objetivos refundacionales del Proceso sin centrarlo en la política económica de Martínez de Hoz ni en la cuestión represiva del régimen.

El libro se halla dividido en una introducción y tres capítulos. El primer capítulo titulado “La cuestión política de la dictadura y los primeros planes”, analiza las fracciones existentes en el gobierno y la estructura y funciones de la SGP, uno de los principales organismos gubernamentales dedicados al análisis de la cuestión política. Además releva los primeros documentos políticos producidos por el llamado Grupo La Plata del general Ibérico Saint Jean, que buscaban desplegar políticas comunitaristas a nivel municipal; por el Ministerio de Planeamiento del general Ramón Díaz Bessone y por la Secretaría del Ejército del general Jorge Olivera Rovere.

En lo referente a la interna política del Proceso la autora distingue tres fracciones. Por un lado la fracción “dura” encabezada por los generales más paradigmáticos del Terrorismo de Estado que se desempeñaban como Comandantes de los Cuerpos de Ejército: Díaz Bessone, Guillermo Suarez Mason, Luciano Benjamín Menéndez y Santiago Riveros, entre otros. Los “duros” eran anticomunistas, antiperonistas y antipolíticos. Adherían al estatismo, desarrollismo y corporativismo y solía oponerse a los propósitos de la política económica liberal de la dictadura. En el extremo opuesto se encontraba la fracción “politicista” del Ejército, entre los que se ubicaban Roberto Viola, Horacio Liendo, José Antonio Vaquero, José Villareal, Antonio Domingo Bussi y Reynaldo Bignone. Tenían una mirada pragmática sobre la dictadura y enfatizaban la cuestión de los medios, oportunidades y tiempos del gobierno. Consideraban que los partidos políticos y las organizaciones sindicales podía ser interlocutores valiosos, que la “lucha antisubversiva” no podía ser el único factor de legitimación por lo cual la dictadura debía clausurar rápidamente la etapa más represiva. Entre los “duros” y

¹ Todos estos documentos han sido digitalizados y pueden ser consultados en la siguiente dirección web: <http://www.edhasa.com.ar/documentosdictadura/>

los "politicistas" se ubicaba una fracción "moderada" encargada de mantener el equilibrio. Allí se ubicaban quienes ejercieron los cargos más altos del Proceso: Rafael Videla, Albano Harguindeguy, Leopoldo Galtieri y el ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Ellos constituyeron lo que la autora llama el "núcleo estable" del Proceso, integrado por la Presidencia de la Nación y los dos "superministerios" del gabinete: Economía e Interior. Desde allí articularon la "lucha antisubversiva" con la reforma económica liberal. En este esquema sorprende la ausencia del almirante Massera, a quien Canelo termina ubicando como "parte de un complejo escenario que incluyó el oportunismo y la desestabilización". A través de su liderazgo la Armada fue uno de los principales focos de inestabilidad del gobierno militar, ejerciendo una crítica feroz a la política económica y profundizando la interna del Ejército.

Fue justamente desde la Secretaría General de la Presidencia, un espacio de coordinación y asistencia al presidente de la Nación, a cargo del general José Rogelio Villareal, que el sector "politicista" enfrentó las propuestas corporativistas y antipolíticas de los duros. Redactaron su propia propuesta política en noviembre de 1977 titulada Plan de Acción Política de la Propuesta de Unión Nacional. Elaborada por el subsecretario Ricardo Yofre buscaba una "solución política acordada" que permitiera a la dictadura "generar su legitimación" basada en el consenso. A diferencia de los planes de los "duros" que fijaban períodos de 12 y 23 años, aquellos postulaban una primera etapa entre 1977 y 1979 donde se debían seleccionar interlocutores para iniciar el diálogo. Buscaban con esto afianzar los vínculos con las fuerzas políticas mediante la reorganización y renovación de los partidos preexistentes y la incorporación de civiles al gobierno. La segunda etapa de este plan debía culminar en mayo de 1983 con la aprobación de diversos instrumentos legales que ordenasen la salida política. Señala Canelo que esta disputa entre "duros" y "politicistas" terminó con el fracaso de los primeros, por razones tanto internas como externas. Por un lado Díaz Bessone fue desplazado del Ministerio de Planeamiento, por un esfuerzo conjunto de la SGP y el Ministerio de Economía, y por el otro la asunción de Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos, que llevaba a una mayor preocupación por la violación a los derechos humanos. De esta manera la dictadura inició la "clausura" de los escenarios más crudos de la "lucha antisubversiva", redujo progresivamente el poder de los "duros" y determinó el pase a retiro de los generales Olivera Rovere, Díaz Bessone, Menéndez, Suarez Mason y Riveros, entre otros.

El segundo capítulo denominado "Los consejeros civiles y los planes político-institucionales de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea", se centra en la influencia de dos intelectuales civiles como el socialista Américo Ghioldi y el liberal Jaime Perriau, y en los planes institucionales de cada fuerza militar. Precisamente mientras se eclipsaba el poder de los "duros" la SGP continuó cultivando vínculos con distintos civiles que en palabras de Canelo "ejercían una verdadera didáctica política sobre las Fuerzas Armadas". Ghioldi, que aceptó el cargo de embajador en Portugal, proponía un acuerdo entre civiles y militares, que detalló en el documento reservado titulado: "Plan de Reforma Política Institucional y de acuerdo

entre FFAA y Partidos Políticos a favor de una etapa de seguridad, estabilidad, convivencia, progreso y paz". Allí planteaba una reforma institucional aprobada por una Asamblea Constituyente y la creación de un Órgano de Observancia Institucional. Alrededor de la figura de Perriau se generó el grupo Azcuénaga, que reunía informalmente a intelectuales, políticos, militares, empresarios, banqueros, abogados y economistas de orientación liberal-conservadora. Desde allí Perriau elaboró en abril de 1978 un documento reservado que planteaba la necesidad de que la dictadura asegurara la "victoria sobre la subversión" traduciéndola en conquistas políticas sustantivas. Para él la entrega de poder a los civiles era inevitable y por eso era fundamental empezar a pensar cómo controlarla. Tanto para Perriau como para Ghioldi, sostenedores de un visceral antipopulismo, elitismo y decadentismo, la única forma de resolver la crisis argentina era vencer al peronismo en elecciones libres.

Con respecto a los planes de cada fuerza Canelo destaca el papel que tuvo la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) en la compatibilización a través de los oficiales de enlace. La CAL, cuya principal función era intervenir en la formación y sanción de leyes reemplazando de hecho al Congreso, se componía de nueve oficiales superiores, tres por cada fuerza armada, y ocho comisiones de trabajo, una por cada ministerio nacional. En lo referente a los planes políticos de cada fuerza la Armada fue la primera en concluir el suyo debido a las aspiraciones presidenciales de Massera. Buscaba avanzar hacia una salida condicionada del poder mediante la creación de un partido político o movimiento cívico y desarrollar elecciones graduales y escalonadas partiendo del nivel municipal. El plan del Ejército ignoraba las recomendaciones de los "politicistas" de la SGP sobre la necesidad de definir plazos de acción y se volcaba hacia el antipoliticismo de los "duros". Coincidió con el plan de la Armada en el descarte de los partidos políticos preexistentes y en avanzar hacia la normalización institucional desde el laboratorio del nivel municipal. Por su parte la Fuerza Aérea, socia minoritaria del gobierno de la dictadura, cohesionada tras el integrismo católico, defendía las posiciones corporativistas y rechazaba cualquier tipo de acercamiento a los políticos. A su vez, al igual que Perriau y Ghioldi, buscaban la institucionalización del Poder Militar en el Gobierno. Finalmente para mayo de 1978 la Junta Militar dio por finalizada la situación de excepcionalidad en el esquema de poder y designó a Videla como Presidente de la Nación hasta marzo de 1981 para lo cual pasaba a retiro militar y cesaba como Comandante en Jefe. A partir de allí la Junta Militar avanzó hacia una mayor concentración y centralización del poder en detrimento de la figura presidencial. Esto produjo el ocaso de los "politicistas" de la SGP, quienes el 1 de diciembre de 1978, encabezados por el general Villarreal y su equipo debieron renunciar, marcando el declive de la cuestión política del Proceso.

El último capítulo titulado "La derrota política del Proceso" relata la manera en que la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en 1979 profundizó el deterioro de los objetivos políticos de la dictadura y explica el fracaso del "diálogo político" entre el Ministerio del Interior y los civiles.

La decisión de invitar a la CIDH tenía que ver con el intento de “clausurar” la etapa de “lucha contra la subversión” y orientar al Proceso hacia nuevas formas de legitimación. Sin embargo, el plan resultó contraproducente y la dictadura terminó abroquelándose en una estrategia inmovilista. A su vez el “diálogo político” comenzado el 26 de marzo de 1980 terminó fracasando por responsabilidad del mismo gobierno que lo convocó. Las Fuerzas Armadas pretendían hacer del diálogo un monólogo donde los civiles debían convalidar las decisiones ya tomadas. La guerra de Malvinas no hizo más que acelerar la descomposición del régimen militar. Según Canelo, el saldo de la derrota fue que los militares perdieron aquel recurso que les había permitido presentarse ante los civiles como las Fuerzas Armadas victoriosas en la guerra interna. La máxima expresión de esta descomposición fue cuando el 22 de junio la Armada y la Fuerza Aérea se desvincularon de la conducción política del gobierno militar. Para cuando el Plan Político de la Junta Militar volvió a ocupar la agenda ya era demasiado tarde.

Como balance general es posible sostener que el libro de Canelo es un aporte necesario para los estudios sobre la última dictadura y también para quienes se interesen por las manifestaciones institucionales del Estado y los agentes que conforman sus elencos políticos, técnicos y burocráticos. Canelo no solo continúa una línea de trabajo ya iniciada en su libro *El proceso en su laberinto: la interna militar de Videla a Bignone* del 2008, sino que además profundiza y añade valiosos datos e interpretaciones sobre la interna política del gobierno militar. Esto es posible por la solidez y exhaustividad con la cual es tratada la documentación, gracias a una investigadora con largos años de experiencia en el estudio de la dictadura, lo cual le permite darle un significado y un contexto histórico y político preciso a esas nuevas fuentes.